

VASILY CARRILLO Y EL ATENTADO A LEIGH

“Les dejo la palabra a mis hermanos de afuera”

En la Penitenciaría, vocero del FPMR-A sostiene que su organización no fue la que amenazó a Pulido

E Por Jaime Valdés s un hombre duro de cuerpo y de alma. Vasily Carrillo fue detenido la primera vez cuando tenía 16 años: “Estuve preso y fui torturado, se me aplicó corriente, se me hizo el submarino. ¿Y por qué? Porque era hijo de un comunista”.

Su padre, Isidoro Carrillo, antiguo dirigente del carbón, fue fusilado en los días posteriores al 11 de septiembre.

La segunda detención —ocurrida el 11 de noviembre de 1986— lo tiene recluido en la Penitenciaría hasta ahora. Está acusado de ser el distribuidor de las armas que ingresaron ilegalmente al país por Carrizal.

Desde el 16 de marzo está en huelga de hambre (“no porque seamos masoquistas en relación a ellas”). Explica: “Hemos iniciado esta huelga porque visualizábamos marzo y abril como meses importantes en la lucha por nuestra libertad...” “Como presos políticos, no podemos concebir que los que más dimos por llegar a esta democracia, exponiendo incluso nuestras vidas, estemos presos”.

Carrillo es presidente de la Coordinadora de Presos Políticos de la Penitenciaría y vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A). La semana pasada lo visitó el nuevo director nacional de Gendarmería, César Pinochet Elorza. El diálogo fue difícil, según contó a HOY la nueva autoridad carcelaria.

“Señor Carrillo, yo también luché contra la dictadura”, le dijo Pinochet Elorza, “la diferencia está en que yo elegí la pluma y usted el fusil”.

El detenido lo miró impertérrito y le

respondió: “El problema es que usted ahora es director de Prisiones, y yo estoy preso”.

Pero a Carrillo lo sorprenden también muchas otras situaciones que considera injustas:

—Me llama la atención que hoy aparezca como figura preponderante de la política chilena un señor como Sergio Onofre Jarpa, que fue ministro del Interior de la dictadura, que sacó a 18 mil soldados a las calles en 1983, que exilió a tanta gente y que ahora en su calidad de senador tenga en sus manos nuestra libertad. Y, en cambio, él no esté respondiendo como autor intelectual y partícipe de las violaciones a los derechos humanos.

Enseguida continúa con sus ejemplos:

—El señor Jaime Guzmán dice que está preocupado de qué vamos a hacer nosotros si salimos en libertad. Entonces le preguntamos si él se preocupó en el año 1978 de hacer un llamado de atención a Pinochet para que no se aprobara la Ley de Amnistía, que al final sólo significó la impunidad para que los miembros de la CNI, además de continuar caminando libremente por las calles de Santiago, siguieran asesinando chilenos e hicieran desaparecer a otros, o que se cometieran crímenes como los degollamientos o la quema de jóvenes.

—Pero el nuevo gobierno ha dado muestras de buena voluntad decretando indultos a los presos de conciencia y pasando a los tribunales los procesos de las fiscalías militares.

—Estamos conscientes de ello. De la buena voluntad del Presidente Aylwin, con la implementación de sus proyectos, pero queda claro que eso no nos garan-

tiza nuestra libertad.

—Pasar a los tribunales civiles, ¿no es acaso una garantía?

—¿Qué garantía nos puede dar un señor Sergio Mery de hacer un juicio justo? Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando me interrogó y es un Torres Silva, vestido de civil. ¿Qué garantías me da la Corte Suprema, la cual tiene al propio Torres Silva como miembro en su calidad de auditor general del Ejército?

—Entonces, ¿cuál es el objetivo?

—Es lo que nos proponemos con nuestra huelga; sensibilizar a los chilenos en cuanto a que nuestra libertad debe ser lo más rápida posible. También queremos legitimar el derecho a decir que nosotros no hemos cometido ningún delito y no cabe dividirnos entre presos políticos de violencia y presos políticos de conciencia.

—Es que hay gente comprometida en hechos de sangre, que dio muerte a personas. ¿Tú no lo consideras delito?

—Lo que pasa es que nosotros luchamos contra un régimen. El problema del uso de las armas no lo impusimos nosotros: lo impuso la dictadura, al igual que la lógica de la guerra. Nosotros lo único que hicimos fue asumir la lucha en todos los frentes. Y el frente principal para nosotros fue justamente luchar con las armas en la mano, porque aquí fueron asesinados más de 15 mil chilenos. Desaparecieron más de dos mil. Cientos de miles fueron torturados, encarcelados o enviados al exilio.

“Al final, ante esta lógica de guerra, ante este terrorismo de Estado, había que responder de alguna forma. En ese marco, nuestras acciones fueron legíti-

mas mediante el enfrentamiento con las armas. Y como en todo enfrentamiento, hay muertos”.

—¿Cómo consideran la actitud de las nuevas autoridades al contemplar indultos para los que no están comprometidos en hechos de sangre y estudiar los demás casos?

—Como positiva, pero insuficiente. Nuestra libertad no pasa por una solución jurídica legislativa. Pasa por una decisión política. Valoramos los pasos que ha dado el gobierno y creemos en su voluntad, pero la decisión tiene que ser más elevada que preocuparse por lo que diga Jaime Guzmán o la derecha. Tiene que preocuparse por lo que dijo el 56 por ciento que votó por Aylwin. Ese porcentaje de ciudadanos votó por la democracia, por la libertad. En especial por la libertad de todos los presos políticos.

—En este caso, las conversaciones que han tenido los presos políticos con la comisión legislativa de la cámara, ¿cómo la valorizan?

—En particular para nosotros, tiene mucho valor la preocupación del diputado Andrés Aylwin. Lo respetamos y confiamos en él por todo lo que ha hecho en estos 16 años en defensa de los derechos humanos. Así también nos parece bien que Alberto Espina venga y conozca a estos presos políticos, a estos “terroristas”. Al igual que otros dirigentes.

—¿Como cuáles?
—Los socialistas, por ejemplo. A mi me llaman mucho la atención las declaraciones de Jorge Arrate, de Ricardo Núñez, de Lagos en cuanto a cuestionar nuestro accionar. Cuando yo tenía 15 años de edad, me acuerdo de estos señores, de sus declaraciones de entonces. Se subían a hablar arriba de un cajón sobre la necesidad de la lucha armada y de implementar una política militar en los partidos que conformaban la Unidad Popular.

—Pero, volviendo a la actualidad, ¿garantizas tú que al ser liberados los presos políticos a los cuales se acusa de violentistas no volverían a cometer actos de ese tipo?

—La actitud que van a asumir los presos políticos una vez que estemos en libertad va a estar determinada por el paso que dé en lo personal cada uno y por lo que determinen sus organizaciones. Eso dependerá de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos políticos. Habría que preguntarle al señor Pinochet qué va a hacer. Porque no es un secreto para nadie que las leyes de amarre, la Constitución del 80, la no democratización de las FF.AA. ni del Poder Judicial garantizan que el régimen militar continúe intacto pese a la existencia de un gobierno civil.

—¿Y qué pasa con el Frente, del cual tú eres vocero, que dice que va a seguir

actuando?
—Yo soy militante del Frente y voy a seguir siéndolo aquí y cuando salga, porque confío que nuestra política es la más acertada en cuanto a construir una sociedad nueva, con verdadera democracia por esa vía.

—Esa vía considera el uso de las armas.

—Sí, pero no la considera absolutizándolas. El empleo de las armas va a estar dado según se vayan dando las condiciones.

—¿Cómo te explicas el atentado en contra de los generales Leigh y Ruiz?

—Sobre ese atentado, por la importancia que tiene, yo no voy a vertir opiniones. Primero, porque no tengo la versión oficial del FPMR. Yo le dejo la palabra a nuestros hermanos de afuera, que están en la clandestinidad: Víctor



Díaz, otro vocero del Frente, o la Dirección Nacional.

—¿Significa eso que, respecto a la autoría del atentado, tienes dudas?

—No. Yo tengo mi opinión, mi criterio personal y, como militante disciplinado del FPMR, lo voy a entregar en mi organización. Porque confío en ella, en la Dirección Nacional, en mi dirección y en los combatientes y milicianos, militantes en su conjunto del Frente.

“Creo sí que es importante decir que así como mucha gente se preocupa del estado de salud de Leigh y Ruiz deberían recordar quiénes fueron ambos. Hay que recordar lo que fue la Academia de Guerra de la FACH. Ahí fue torturado Clodomiro Almeyda, Jorge Arrate, entre otros dirigentes que hoy participan del gobierno. Leigh fue res-

ponsable del bombardeo a La Moneda”.

—A causa de ese atentado, sectores de derecha han hecho pública su oposición a la libertad de los presos políticos.

—Esto es algo que nos preocupa: el atentado a Leigh ha sido manipulado mucho en relación a la problemática de los presos políticos. Eso es inmoral e inconsecuente, sobre todo por parte de sectores de la derecha que lo quieren utilizar para hacer descalificaciones y planteamientos erróneos en relación a los presos políticos.

—O sea, ¿coincides con la declaración del ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, en cuanto a que no hay ninguna relación entre el atentado a los generales y la libertad de los presos políticos?

—Por supuesto. La única relación que puede haber es la necesidad de justicia.

—El otro hecho que llama la atención es la amenaza —supuestamente del FPMR— que recibió el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, Roberto Pulido. ¿Qué puedes decir al respecto?

—Estoy convencido de que el FPMR no amenazó a Pulido. Primero, porque el Frente no utiliza como método la amenaza, y menos amparado en la oscuridad a través de un teléfono. Y segundo, jamás vamos a hacer algo en contra de los periodistas, independiente del rol que hayan jugado tanto a favor como en contra del régimen de Pinochet, algunos denunciando las violaciones a los derechos humanos, otros escondiéndolas. Esa amenaza es una provocación, es una manipulación. Yo voy a hacer los intentos de comunicarme con el señor Pulido y hacerle llegar el desmentido a nombre del Frente.

—Se han atribuido al Frente algunos panfletos en los cuales se daba el nombre de personas a las cuales se le atribuyen violaciones a los derechos humanos y que, de no ser juzgados, serían “ajusticiados”.

—Nuestro accionar está relacionado con las condiciones políticas de cada momento y de los pasos que se den para resolver los problemas del pueblo. Nosotros esperamos del gobierno de Aylwin una acción concreta en cuanto al juicio y castigo de los criminales, como por ejemplo juzgar a un Manuel Contreiras, o a un Arellano Stark. Si esos pasos no se dan, van a determinar que no sólo el Frente actúe, sino que lo hagan también sectores del pueblo exigiendo justicia.

—También se ha dicho que el FPMR estaría infiltrado y que algunas de sus acciones responderían a eso.

—Eso lo desmiento categóricamente; es parte de la campaña de desprestigiar al Frente ante el pueblo. Y en esto, lo que más lamentamos es que de ello se hagan eco sectores de izquierda. •